ACCIÓN DE AMPARO

SEÑOR JUEZ LETRADO DE FAMILIA DE 1º TURNO:

Damaris Marisol GONZÁLEZ MUJTARIAN, titular de la CI n° 4.399.453-9, con domicilio en calle Francia N° 2047 (Cooperativa COVIECUADOR) Tira 9 Apto 5 (Montevideo), compareciendo por mí misma; y **Daiana Jenifer BURACIOC DE PEREDA**, titular de la CI n° 2.897.544-5, compareciendo en representación de los menores **Mateo BURACIOC DE PEREDA**, CI n° 6.297.664-9 y **Julieta BURACIOC DE PEREDA**, CI n° 6.297.662-7, ambos con domicilio en calle Francia N° 2047 (Cooperativa COVIECUADOR) Tira 9 Apto 5 (Montevideo), en su calidad de madre en ejercicio de Patria Potestad que se acredita con partidas de nacimientos; constituyendo todas domicilio procesal a los efectos de este juicio en Av. 18 de julio 1824 (**Consultorio Jurídico Facultad de Derecho Grupo Dr. Juan Ceretta**) y electrónico **CJUDELAR14@notificaciones.poderjudicial.gub.uy**; al Sr. Juez **DECIMOS:**

Que venimos a promover **ACCIÓN DE AMPARO** contra el Estado Uruguayo - Poder Ejecutivo - en la persona del **Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C.)**, sito en Reconquista 535, piso 9 (Montevideo); en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer:

I. HECHOS:

ANTECEDENTES

1. Nos conocimos en el año 2015 y entablamos una relación afectiva, y desde ese entonces hemos estado en pareja y conviviendo en el mismo hogar.-
2. Con mucho entusiasmo y decididas a ampliar nuestra familia, en diciembre de 2016 comenzamos a transitar el arduo camino que implica el tratamiento de fertilización asistida.-
3. Estando ambas en condiciones de gestar, decidimos que fuera Daiana quien se sometiera al tratamiento. En Uruguay la ley N° 19.167 sobre "Técnicas de Reproducción Humana Asistida" prohíbe la gestación subrogada, lo que en nuestro caso sería que una de nosotras aportara los óvulos y la otra

gestara en su útero. Por tanto, no teníamos más opción que ser una u otra la que realizara el tratamiento.-

4. Lo situación anterior no implico que el entusiasmo fuera mayor en una que en la otra, ya que sin importar cuál de las dos gestara, iba a ser nuestro/a hijo/a, o como terminó sucediendo, hijo e hija.-
5. Todas las instancias del tratamiento las transitamos siempre juntas; cada control, cada ecografía. Nos presentamos como pareja, lo vivimos como pareja, nos reconocieron todos y en todo momento como las futuras madres. Incluso, tal como puede observarse en el documento adjunto como **Prueba A**, en la clínica ambas firmamos el consentimiento informado para la inseminación artificial. La existencia de este documento resulta sumamente relevante, ya que tal como se analizará más adelante, si estuviéramos casadas esa sería prueba suficiente de que yo Damaris también soy madre de los niños.-
6. Finalmente, tal como surge de las correspondientes partidas de nacimiento (**Prueba B**), el día 1º de diciembre de 2017 nacieron nuestros hijos Mateo y Julieta, lo que trajo consigo una inmensa alegría, tanto para nosotras así como para nuestra familia y entorno de amigos.-
7. Dentro del plazo previsto legalmente, el día 5 de diciembre de 2017, en el plazo de 10 días posteriores al nacimiento, nos presentamos ambas, como pareja, ante la oficina de la Dirección General del Registro de Estado Civil ubicada en Sarandí N°428, para inscribir y reconocer ambas, a nuestros pequeños hijos.-
8. Grande fue nuestra decepción cuando los funcionarios nos dijeron que solo la madre gestante (Daiana) podía reconocer a los niños, que la madre no gestante (Damaris) no podía reconocerlas pero podía si quería realizar una adopción plena. No nos explicaron por qué no era posible, ni siquiera parecían saberlo, fue un no rotundo.-
9. Ante esta situación y la impotencia que nos generó que solo Daiana pudiera reconocer a los niños, además de la esperanza que nos generó que una pareja en igual situación pudiera reconocer a sus hijos, el día 12 de octubre

del corriente formulamos una petición administrativa ante la Dirección General del Registro de Estado Civil, la cual agregamos como **Prueba C.**-

10. Dado que consideramos un derecho fundamental e impostergable el reconocimiento por ambas madres de los niños, así como de los niños a llevar el apellido de ambas progenitoras, y sin resultados favorables en el ámbito administrativo, es que procedemos a iniciar la presente ACCIÓN DE AMPARO.-
11. Cabe adelantar que nuestra pretensión encuentra sustento en diversa normativa de carácter internacional que incluso ingresa a nuestra norma de mayor jerarquía por el denominado bloque de constitucionalidad que comprenden los artículos 72 y 332 de la Carta Magna.-
12. También fundaremos esta acción atendiendo al reciente fallo del Sr. Juez Letrado de Familia de 18º Turno, el Dr. Gerardo Álvarez en un recurso de amparo de similar pretensión que la nuestra.
13. En el marco de ese proceso, el Director del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Maqueira, expresó: *“la posición institucional del MEC frente al caso planteado es la voluntad de hacer lugar a las inscripciones que se solicitan. (...) La voluntad es que estos casos se puedan resolver, pero tenemos una normativa por el cual los oficiales del Registro de Estado Civil no pueden realizar las inscripciones tal como se ha solicitado.”* (se adjunta su declaración como **Prueba D**). Estos dichos fueron confirmados con la actitud del MEC al no apelar el fallo.-
14. La conducta discriminatoria que significa impedir el reconocimiento de las criaturas por una de sus madres se visualiza claramente desde el momento en que si fuera varón podría hacerlo sin ningún requisito previo; incluso se verifica la paradoja de que cualquier hombre con deseo de reconocer un niño, solo debe manifestar su voluntad de hacerlo sin que se exija ningún vínculo de índole genético con el mismo.-
15. Pero hete aquí, que por el hecho de ser mujer, se priva a Damaris de la posibilidad de reconocer a sus propios hijos, todo lo cual constituye una conducta inadmisibles, que amerita su corrección a través de la tutela jurisdiccional.-

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FILIACIÓN EN URUGUAY - LEYES 19.075 Y

19.167

16. La filiación es un instituto del Derecho de Familia, refiere a la relación de los padres respecto de los hijos y da origen a variadas consecuencias jurídicas.-
17. Históricamente, la filiación tuvo su fuente en la biología. El vínculo entre un hijo y sus padres, ha sido y sigue siendo en este sentido, una consecuencia de la procreación: el acto carnal entre un hombre y una mujer. Se trata de un vínculo por naturaleza, el cual es presupuesto de las consecuencias jurídicas mencionadas.-
18. Entre los vínculos por naturaleza debe diferenciarse a su vez, entre matrimoniales y no matrimoniales. En cuanto a derechos y deberes no existen al día de hoy mayores diferencias, pero sí las hay respecto al emplazamiento, es decir, respecto a las exigencias requeridas para que esa filiación sea legalmente reconocida.-
19. En el caso del vínculo por naturaleza matrimonial, el artículo 214 del Código Civil establece la presunción de que si los cónyuges viven de consuno, se considerará al otro cónyuge jurídicamente progenitor del niño concebido por su esposa durante el matrimonio.-
20. Por su parte, el vínculo por naturaleza no matrimonial requiere de emplazamiento. El artículo 233 y 220 del Código Civil, así como 197 y 31 del Código de la Niñez y la Adolescencia regulan: el reconocimiento voluntario expreso (ante la Oficina del Registro de Estado Civil, por testamento o por escritura pública); el reconocimiento voluntario tácito (por la acción de posesión notoria de estado civil); y el reconocimiento forzoso (por acción de investigación de paternidad o maternidad).-
21. Con el paso del tiempo, como consecuencia de los cambios socioculturales y los avances científicos, surgieron otros tipos de filiación, los cuales tienen su fuente en la ley. Estos son la adopción y la progenitura jurídica.-
22. La adopción se funda en razones sociales y afectivas. Se trata de una ficción que imita o al menos en un comienzo se limitó a imitar a la realidad biológica; ya que antes solo se permitía adoptar a parejas heterosexuales, quienes

tomaban en condición de hijo a quien biológicamente no lo era. Hoy en día eso ha cambiado, y se ha extendido la habilitación para adoptar a otras personas y parejas (parejas homosexuales, padres y madres solteros).-

23. La figura de la **progenitura jurídica** que es la que más nos importa a los efectos de este escrito, es un tipo de filiación que surge con la Ley 19.075 de Matrimonio Igualitario, y que tiene su fundamento en razones científicas y volitivas, es decir, referidas a la voluntad de ser padre o madre. Esta ley importa una modificación al artículo 214 del Código Civil, ubicado dentro del Título VI “De la paternidad y filiación” en el Capítulo I “De los hijos legítimos”. Este nuevo artículo adapta la filiación matrimonial para incluir a los matrimonios homosexuales. No pudiendo utilizar la presunción como con las parejas heterosexuales, el legislador en el inciso tercero crea una ficción legal y establece que aquellas personas biológicamente impedidas entre sí para concebir, serán los progenitores jurídicos del hijo matrimonial, siempre que antes de la fecundación del óvulo lo acepten por *consentimiento expreso y escrito*.-

24. Luego la Ley 19.167 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), complementando la disposición anteriormente mencionada, estableció en su artículo 7º lit. d), entre los requisitos para la realización de TRHA, el *“consentimiento escrito por parte de ambos miembros de la pareja o de la mujer en su caso, para la realización de técnicas de reproducción asistida en un formulario que establezca la reglamentación, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 18.335. de 15 de agosto de 2008.”*. Esa referencia al artículo 11 de la Ley de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios de la Salud, establece el requerimiento de un consentimiento informado del paciente previo a someterse a un procedimiento médico. En base a esto, se entiende que la figura de la progenitura jurídica está determinada por ese consentimiento informado firmado en la Clínica en que se lleve a cabo el tratamiento correspondiente.-

25. Al respecto, Cabeza expresó en un artículo cuáles eran para él los aspectos a regular referentes a las TRHA: *“Estas técnicas, por la repercusión que tienen en materia filiatoria deben ser objeto de una triple regulación: A) La*

primera, es la Civil, es decir cuáles son los derechos y cómo se determina la filiación de los niños que nacen por medio de estas técnicas.” (CABEZA. La gestación subrogada y su incidencia en la filiación - Ley N° 19.167. UY/DOC/76/2014. Pág. 3).-

26. Pero independientemente de las discusiones que puedan generarse respecto a la progenitura jurídica y el acuerdo del que emana, hay algo que sí es claro: es una filiación matrimonial.-
27. La descripción de dónde ubicamos al artículo 214 y que su modificación provenga de la Ley de Matrimonio Igualitario no es casualidad, sino que evidencia que este tipo de filiación solo es posible para personas unidas en matrimonio, quedando excluidas aquellas que no lo estén.-
28. En nuestro caso, como ya se adelantó, ambas firmamos en la clínica el consentimiento informado que constituye al acuerdo de progenitura. Sin embargo al no estar casadas, no fue relevante a efectos de poder reconocer a los niños, esto por tratarse de un elemento que solo se reguló como determinante en la filiación matrimonial.-
29. De esta forma, se constata que al día de hoy y en la misma línea de lo que afirma Cabeza, una intolerable desigualdad respecto a aquellos progenitores no unidos en matrimonio; situación solo verificable para las parejas homosexuales. Es imprescindible corregir esta vulneración al amparo de la diversa normativa internacional y constitucional que se vulnera al no admitirlo.-
30. En otras palabras, es necesario admitir el reconocimiento voluntario en situaciones como la nuestra: la filiación no matrimonial como consecuencia de las TRHA.-
31. Esta situación ha sido advertida correctamente por la doctrina más prestigiosa, así, Sánchez Casal, expresa al respecto:

*“... Así, y solo marcando aspectos de suma importancia, notamos que:
a. Existe un vacío legal en sede de filiación del Código Civil, respecto a la progenitura jurídica a los casos de filiación no matrimonial,...”.*

“...Por su parte, consideramos necesario adecuar el Código Civil en materia de filiación y el Código de la Niñez y la Adolescencia en materia de

filiación adoptiva: (...) b) En sede de filiación no matrimonial, integrando el art. 233 como otra forma de emplazamiento al pacto de progeneritura, estableciendo solemnidades apropiadas a la importancia del mismo, a fin de que todas ellas formen un sistema armonioso y sistemático.” (SÁNCHEZ CASAL. Régimen jurídico de la filiación: sus diferentes dimensiones. Derecho y Jurisprudencia de Derecho Civil, Año IV - Tomo IV, 2016. Págs. 180 y 181).-

32. Afortunadamente, los artículos 7 y 72 de nuestra Constitución nos amparan en el goce de nuestros derechos inherentes a la persona humana, ya sea que estos estén reconocidos expresamente por esta o que estén reconocidos internacionalmente, caso en que ingresan por la vía del mencionado artículo 72. Indudablemente, el hecho de ser reconocidos y ser asegurado su goce, debe necesariamente implicar que podamos exigir jurídicamente su efectiva tutela.-
33. También afortunadamente, a pesar de cometer el error de no prever nuestro caso concreto en la regulación de la filiación, el legislador sí previó cometer ese tipo de errores. Asumiendo la imposibilidad de contemplar todos los supuestos que los derechos consagrados constitucionalmente abarcan, creó el artículo 332.-
34. Y no solo creó el artículo 332 en la Constitución, sino que dada su importancia, se encargó de incorporar artículos similares en nuestros Códigos. Así es que encontramos los artículos 4 y 5 en el Código de la Niñez y la Adolescencia y el artículo 15 del Código Civil.-
35. Ahora, entendamos cómo nos protege a nosotras -y a todo desamparado por la ley- el artículo 332 de la Constitución. Esta norma reza: *“Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que será suplida, recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.”*-

36. Es decir que el hecho de que no esté regulado en forma expresa, no puede servir de excusa para negarnos nuestros derechos. Por el contrario, es deber de los jueces hacer valer esos derechos, protegiéndonos ante las fallas como la que se advierte.-
37. Nos sentimos también seguras de estar amparadas por las diversas normas internacionales y la obligación del Estado Uruguayo de cumplir con ellas, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. Tal es así que estamos en condiciones de exigir que se cumpla con la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), por mencionar algunos de los principales instrumentos internacionales que Uruguay estaría incumpliendo al violar nuestros derechos.-
38. Establece el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estado uruguayo no puede poner como excusa para su incumplimiento, el contenido de su normativa interna; lo que junto con el principio de no regresión consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hacen más que exigible que se atienda nuestro reclamo en aras de hacer valer nuestros derechos.-
39. Con base en lo anteriormente mencionado, es que nos presentamos ante el Sr. Juez, a pedirle que cumpla con su deber de aplicar las normas y proteger nuestros derechos, tal como lo establece claramente el artículo 332 de nuestra Carta Magna.-

II. PETICIÓN ADMINISTRATIVA

40. El 12 de octubre del corriente año, tal como nos habilita la Constitución de la República en sus artículos 30 y 318, presentamos una petición por escrito ante la Dirección General del Registro de Estado Civil, en la forma indicada por el Decreto N° 500/991. Al día de hoy no hemos recibido respuesta al respecto. Tal como mencionamos anteriormente, la petición se encuentra como **Prueba C.**-

III. FUNDAMENTOS DEL AMPARO – PROCEDENCIA

41. Este amparo procede en el caso concreto, en virtud de que se busca evitar

que se profundice la lesión de un derecho constitucionalmente protegido, como consecuencia de hechos u omisiones del Ministerio de Educación y Cultura (en adelante “MEC”), que es de quien depende la Dirección General del Registro de Estado Civil. En este sentido, la Acción de Amparo debe verse como una de las garantías para la real y efectiva protección de los derechos constitucionales.-

42. Así sostiene la doctrina: *“Este proceso de positivización de los derechos fundamentales, condujo necesariamente, en la medida en que se reconocen derechos a los individuos, a la necesidad de establecer diversos institutos (garantías) que permitieran asegurar su real efectividad en la práctica. El Estado no asume un rol pasivo frente a esta problemática sino que deberá actuar, teniendo como especial objetivo la búsqueda y obtención de la efectiva protección de todos los habitantes en el goce de los derechos constitucionales...”* (RISSO FERRAND, Martín, Derecho Constitucional Tomo I, FCU 2º Ed. 2006. Pág. 525).-
43. Realizamos la petición ante el M.E.C sin obtener respuesta alguna, y el mismo Director del M.E.C, Pablo Maqueira, ha declarado: *“... tenemos una normativa por el cual los oficiales del Registro de Estado Civil no pueden realizar las inscripciones tal como se ha solicitado.”* -refiriendo a la petición de una pareja que se encontraba en igual situación que la nuestra-, lo que permite asumir desde ya que la respuesta será de rechazo.
44. Agotamos todos los medios que estaban a nuestra disposición y no encontramos ningún otro proceso judicial que nos permita hacer valer nuestra pretensión. Es por esto, que recurrimos a la vía del amparo.-

IV. COMPETENCIA JUDICIAL

45. El artículo 7 de nuestra Carta Magna reconoce el derecho a la protección en el goce de los derechos inherentes a la persona humana, no solo los expresamente reconocidos en esta, sino también los reconocidos internacionalmente y que ingresan por la vía del artículo 72. Ese reconocimiento implica necesariamente la posibilidad de exigir jurídicamente su tutela efectiva.-

46. La ley 16.011 recoge esa garantía constitucionalmente consagrada, reglamentando específicamente con el fin de asegurar su efectiva tutela. En su artículo 3º establece la competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia para entender en los procesos de amparo, determinando así la competencia de esta Sede.-
47. Por otro lado, el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia consagra una acción de amparo particular cuando se tratare de pretensiones cuyo contenido es la protección de los derechos de niños y adolescentes. En este sentido, le atribuye competencia a los Juzgados de Familia en los casos en que se lesionen derechos de niños y adolescentes, independientemente de quién sea el demandado.-
48. De ese modo, el CNA prioriza la especialidad del objeto de tutela, desplazando para este caso la competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo a los Juzgados Letrados de Familia.-
49. Así lo entendió el TAF de 2º Turno a través de la SEI 277/2017, en la cual expresó: *“...El art. 195 del CNA dispone que la acción de amparo para la protección de los derechos de niños y adolescentes, será competencia de los Juzgados Letrados de Familia. Así lo entiende unánimemente la doctrina y jurisprudencia (...) Seguramente el legislador pretendió con dichas palabras identificar como elemento definitorio de la competencia en todos los casos para esta acción de amparo especial de los Juzgados de Familia, su objeto, es decir la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Solución que se entiende más allá o, independientemente, de quien sea demandado en la acción (Estado, persona jurídica privada, estatal o paraestatal, persona física) porque se reconoce una especialidad propia del objeto de protección, se repite: derechos de niños y adolescentes”*.-
50. Es en base a lo expuesto que nos presentamos ante esta Sede y no otra, ya que el contenido de este juicio versa sobre la lesión a los derechos fundamentales de nuestros menores hijos, Mateo y Julieta.-

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

51. Resulta del art. 1 de la Ley 16.011, que se otorga legitimación activa a cualquier persona física o jurídica, pública o privada que se vea lesionada en cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución Nacional, con las excepciones expresamente mencionadas por la norma. En el presente caso, se lesiona el derecho a la protección de la vida, la salud, la igualdad y la dignidad humana, protegidos por los artículos 7, 8, 40, 41, 42, 72 y 332 de la Constitución Nacional.-
52. Lamentablemente Mateo y Julieta, por ser hijos de pareja homosexual y habidas fuera del matrimonio, no son protegidas por el Estado debido a no estar contemplada expresamente la situación de nuestra familia en la normativa vigente.-
53. Sin embargo, estamos convencidas de que gracias a lo establecido en los artículos 7 y 72 de la Constitución, debemos ser protegidos en el goce de nuestros derechos; y que gracias a lo que reza el artículo 332 de la misma, ese deber subsiste independientemente de la falta de regulación al respecto. Esa tarea de protegernos es la que venimos aquí a exigir al Sr. Juez.-
54. También cabe decir que el Estado uruguayo, al lesionar nuestros derechos se encuentra en violación de normas internacionales que han sido ratificadas por él, pudiendo llegar a incurrir en responsabilidad internacional.-
55. Por lo tanto, para proteger el derecho de nuestros hijos a no ser discriminados y tener los mismos derechos que aquellos habidos dentro del matrimonio, de ellos y nuestro de formar una familia y que esta sea reconocida y protegida por el estado y la sociedad, esta situación debe ser subsanada por el demandado permitiendo el registro de ambos niños como hijos de las comparecientes.-

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

56. La acción de amparo procede ante cualquier persona pública o privada, física o jurídica a quien se le impute el acto, hecho u omisión violatorio de los derechos o libertades constitucionalmente protegidos.-

57. En la especie nos encontramos frente al Estado, en la persona Ministerio de Educación y Cultura.-
58. La Administración por sí misma o el sistema por ella creado deben brindar una respuesta frente a la lesión que se produce al no permitir a ambos integrantes de una pareja homosexual reconocer a sus hijos, porque no previó esa situación familiar.-
59. Surge de la propia Constitución de la República y de diversas normas, que el Estado debe velará por la protección de la familia y de los hijos.-
60. El Ministerio de Educación y Cultura está legitimado pasivamente por no cumplir con el deber constitucional establecido por el art. 40 y 42 de la Carta Magna de velar por la estabilidad de la familia y los hijos, brindando a los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos derechos que los nacidos en él, conculcando de esta manera el derecho a la igualdad y no discriminación establecido en nuestra Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el país.-
61. La privación de derechos a los niños, no solo los lesiona actualmente al privarlos de su identidad y su familia, sino que también puede derivar en la lesión a futuro respecto a cuestiones relacionadas a derechos alimentarios y hereditarios, e incluso beneficios como la afiliación mutual a hijos de trabajadores, entre otros. Nos encontramos ante una falta del Estado y sus prácticas -en este caso administrativas- que van desfasadas y en contradicción con los principios constitucionales y legales, e incluso con las normas vigentes nacionales e internacionales, generando y promoviendo como consecuencia situaciones de desigualdad y discriminación para con grupos sociales vulnerables.-

V. ELEMENTOS OBJETIVOS

A) Lesión a un derecho constitucionalmente protegido

62. Nuestra legislación da procedencia al amparo cuando estamos ante la lesión de un derecho constitucionalmente protegido, exceptuando la libertad ambulatoria, que se encuentra garantizada por el Recurso de Habeas Corpus, regulado por el art. 17 de la Carta Magna. Cuando hablamos de derechos constitucionalmente protegidos no nos referimos únicamente a

aquellos que se encuentran implícita o explícitamente reconocidos en la Constitución Nacional sino también a aquellos recogidos en los instrumentos internacionales de DDHH que ingresan al mencionado cuerpo por la vía del Art. 72.-

Principio de igualdad y derecho a la no discriminación

63. El principio de igualdad está recogido expresamente en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, así como también en distintos instrumentos internacionales suscritos por el Estado uruguayo, tales como el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.-
64. La conducta reprochada implica per se una actitud discriminatoria fundada en la orientación sexual de las personas, perjudicando también a los niños por ser habidos en el seno de una pareja homosexual, todo lo cual resulta absolutamente intolerable.-
65. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del 24 de febrero de 2012 en el caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, expresó:
- “...Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. La expresión “cualquier otra condición social” del artículo 1.1. de la Convención debe ser interpretada por la Corte, en consecuencia, en la perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo. Al respecto, en el Sistema Interamericano, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (en adelante “OEA”) ha aprobado desde 2008 en sus sesiones anuales cuatro resoluciones sucesivas respecto a la protección de las personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género, mediante las cuales se ha exigido la adopción de medidas concretas*

para una protección eficaz contra actos discriminatorios...El Tribunal constata que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos.”.-

66. Cabe hacer referencia a una de las resoluciones de Asamblea de la OEA referida por la Corte Interamericana en la cita anterior: “AG/RES. 2653 (XLI-O/11), *Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011 (“LA ASAMBLEA GENERAL [...] RESUELVE: 1. Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e **instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación**”).*.-

67. También resulta relevante mencionar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés), y destacar el artículo 5º que establece que: “*Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres...*”; y el artículo 16 que expresa: “*Los Estados Partes adoptaran todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres...*”.-

68. Pero no solo se nos está discriminando a nosotras como pareja, sino también a nuestros hijos Mateo y Julieta, en cuanto por ser hijos de una pareja homosexual y nacidos fuera del matrimonio, se les está privando de derechos.-
69. En cuanto a nuestra normativa nacional la Constitución uruguaya en su artículo 42 establece específicamente la igualdad entre los hijos habidos fuera del matrimonio y los nacidos en él; y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 28 establece el derecho y deber de todo progenitor, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.
70. Internacionalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 2º establece la obligación de los Estados partes a respetar y asegurar los derechos enunciados en la Convención sin distinción alguna, independientemente de cualquier condición de los niños, de sus padres o de sus representantes legales. Siguiendo con esa obligación, en su artículo 4º establece el deber de los Estados Partes de adoptar *“todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.”*.-

Protección de la familia

71. Al no permitirnos ser legalmente ambas madres de Mateo y Julieta, también se nos está discriminando no solo individualmente, sino también como familia, a nuestro determinado modelo de familia: una pareja de mujeres no casadas con dos hijos nacidos por tratamiento de fertilización asistida.-
72. En los artículos 40 y 42 de nuestra Constitución, se establece el deber del Estado uruguayo de velar por la familia y los hijos, e incluso por la maternidad. Sin embargo, en el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia que se encuentra en el Capítulo VII “De la filiación” y se refiere al nombre de los niños, hace una amplia enumeración de todos los posibles supuestos en que se puede dar la inscripción de los niños. En esa enumeración, se contemplan, entre otras, los supuestos de hijos habidos fuera del matrimonio en caso de parejas heterosexuales y de hijos habidos dentro del matrimonio homosexual, pero no se contempla el supuesto de hijos habidos fuera del matrimonio en caso de parejas homosexuales, es la

única situación excluida. Esta omisión no solo va es contraria a las disposiciones constitucionales, sino también al artículo 28 del mismo código, que establece el derecho y deber de todo progenitor, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.-

73. Sin embargo, más allá de la omisión referida, no hay en nuestro ordenamiento norma alguna que prohíba el reconocimiento por parte de ambos integrantes de una pareja homosexual de sus hijos. Por otra parte, sí encontramos en la Constitución uruguaya el artículo 332, el cual viene a subsanar esa omisión y a ordenar la aplicación de normas supliendo la reglamentación faltante.-

74. Internacionalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece la protección de la familia en su artículo 16.3. También la Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su artículo 11.2 la protección a la vida privada y familiar. En la sentencia ya mencionada del caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, la Corte expresa respecto al artículo 11 que *“si bien esa norma se titula “Protección de la Honra y de la Dignidad”, su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada. La vida privada es un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. Es decir, la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás.”*.-

75. La Corte se vuelve a referir a este tema en la opinión consultiva OC-24 de 24 de noviembre de 2017 titulada “Identidad de género, y no discriminación a parejas del mismo sexo” en respuesta al Estado de Costa Rica. En este caso hace algunas apreciaciones importantes respecto a la interpretación de los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana: *“(…) Ninguna de las normas citadas contiene una definición taxativa de qué debe entenderse por “familia”. Sobre el particular, la Corte ha señalado que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo en particular de la misma... Como fue mencionado en el Capítulo V de la presente opinión, el contexto de un*

tratado comprende también, inter alia, el sistema jurídico al cual pertenecen las normas a ser interpretadas. En este sentido, el Tribunal ha considerado que al dar interpretación a un tratado no solo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste, sino también el sistema dentro del cual se inscribe, esto es, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos... Es por ello que la Corte ha estimado necesario que además de tener en cuenta todas las disposiciones que integran la Convención Americana, se requiere verificar todos los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con ella, por cuanto permiten verificar si la interpretación dada a una norma o término en concreto es coherente con el sentido de las demás disposiciones. En este sentido, la Corte advierte que los artículos 5 y 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" de 17 de noviembre de 1988, y el artículo XVII357 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 15 de junio de 2016 contienen disposiciones análogas al artículo 17 de la Convención Americana...Ninguno de los textos contiene una definición de la palabra "familia" o algún indicio de ello. Por el contrario, la formulación de las disposiciones citadas es más amplia.”.-

76. Por su parte, el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la importancia de la familia como grupo social y como medio para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y especialmente de los niños.-

Protección especial a los niños

77. A nivel nacional, la protección a los niños se consagra especialmente en los artículos 40 y 41 de la Constitución de la República y en el artículo 3 del Código de la Niñez de la Adolescencia.-

78. La protección especial a los niños en el ámbito internacional está consagrado en muchos instrumentos, como por ejemplo en el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19 de la

Convención Americana y en el párrafo 5º del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, por mencionar solo algunos.-

79. La especial protección de los niños es de suma importancia, ya que se trata de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad debido a su falta de madurez física y mental. He allí la importancia de que la sociedad y los Estados velen por su seguridad y bienestar.-
80. Al no permitir a los niños ser reconocidas por sus dos madres, se los está desprotegiendo en el goce de diversos derechos consagrados en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia.-
81. Entre los derechos lesionados, encontramos el derecho a la filiación y el derecho a la protección (artículos 23 y 24 del CNA respectivamente), los cuales implican que todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres y a ser protegidos y cuidados por estos hasta la mayoría de edad. Estos derechos también son recogidos en el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños.-
82. Entre los cuidados mencionados en el punto anterior, encontramos las obligaciones alimentarias que deben brindar los padres a sus hijos y que se encuentran reguladas en el Capítulo VIII del CNA. En este sentido, el no estar reconocidas por una de sus madres, implica que Mateo y Julieta no van a futuro no van a poder reclamarle a esta esos alimentos, aún estado en su derecho, aún estando incluso en necesidad.-
83. También se lesionan su derecho al nombre y apellidos familiares y el derecho al nombre, establecidos en los artículos 26 y 27 del el CNA respectivamente, y también consagrados en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunque se titulan de similar forma, estos derechos implican distintas cosas. El derecho al nombre en nuestra legislación consiste en la inscripción de todo niño, desde su nacimiento, con nombre y apellido. Mateo y Julieta tienen solo los apellidos de una de sus madres, por lo que la mitad de su identidad y vínculos familiares no son reconocidos legalmente.-
84. Respecto al derecho al nombre consagrado en el artículo 27, cabe decir, en primer lugar, que están excluidas por su modelo de familia, por no

contemplarse que una pareja homosexual no casada tenga hijos por asistida. En segundo lugar, que en el numeral 9) se establece que *“En todos los casos de hermanos hijos de los mismos padres, el orden de los apellidos establecido para el primero de ellos, regirá para los siguientes, independientemente de la naturaleza y el orden del vínculo de dichos padres.”*. Esto no es para nada menor, ya que como mencionamos en los hechos, ambas, Daiana y Damaris estábamos y estamos en condiciones de gestar, por lo que es una posibilidad que a futuro realicemos otro tratamiento y sea en ese caso Damaris la madre gestante. En ese hipotético caso, ¿qué pasaría con Mateo y Julieta y su hermano/a? ¿No llevarían todos los mismos apellidos? ¿No serían reconocidos legalmente como hermanos, como parte de la misma familia?.-

85. En el artículo 28 del CNA se establece el derecho y deber de ser reconocidos por sus progenitores, cualquiera sea su estado civil. Consideramos que la violación de este derecho ya es más que claro ante todo lo expuesto.-
86. Mateo y Julieta también están siendo desamparados en cuanto a sus derechos sucesorios, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Al reconocerse su vínculo filiatorio con Damaris, cuando fallezca no se las va a considerar legitimarios ni serán llamados a la sucesión. Aún declarándolos herederos por testamento, estarán siendo perjudicados respecto a sus otros hermanos sí reconocidos, ya que solo les corresponderá lo que sea la parte de libre disposición.-
87. Incluso nos encontramos desamparadas en derechos de materia laboral, ya que al no permitir a una madre reconocer a sus hijos, se la desprotege en el goce de la licencia por maternidad regulada en la ley 19.161, y por ende también se priva a los niños de pasar tiempo con su madre. Cabe aclarar que al hablar de licencia por maternidad de la madre no gestante, nos remitimos por analogía a lo regulado respecto a la licencia por paternidad, ya que al no contemplar la ley el caso de parejas homosexuales, en cumplimiento del artículo 332 de nuestra Constitución, debemos aplicar ese derecho recurriendo a la analogía y a los principios generales del derecho.-
88. Al no ser ambas legalmente madre de los niños, también se ven privados de

beneficios referidos a la salud. En nuestro caso, Daiana actualmente se encuentra sin trabajo y los niños podrían quedar sin cobertura mutual como consecuencia, mientras que yo Damaris, teniendo trabajo y la posibilidad de extenderle los beneficios a Mateo y Julieta, no puedo por no ser legalmente su madre.-

89. Nos vemos lesionadas en general en el ejercicio y goce de todos los derechos y deberes que emanan del ejercicio de la Patria Potestad.-

B) Ilegitimidad manifiesta

90. La ilegitimidad manifiesta en el accionar de los órganos públicos se constata cuando los actos, hechos u omisiones sean contrarios a una regla de derecho o se incurra en desviación de poder. Se entiende por regla de derecho a "...todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual". (Cfm. OCHS, Daniel. La acción de amparo. Cuadernos de Fundación. Derecho Público I. Ed. 2º. Pág. 86).-

91. La calificación que la ley otorga de "manifiesta", es un concepto jurídico indeterminado que debe ser considerado en el caso concreto y evaluado por el Magistrado.-

92. Como se sostiene en sentencia N° 63/1990 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno: *"el elemento de ilegitimidad manifiesta no debe interpretarse con un criterio extremadamente restrictivo. Tal afirmación no colide con la exigencia doctrinaria y jurisprudencial que requiere que la ilegitimidad sea ostensible, clara y surja sin más necesidad que una prueba mínima, que pueda efectuarse sin deterioro de la sumariedad y celeridad del procedimiento."*.-

93. Si bien en los primeros tiempos de aplicación de la ley 16.011 el control del mencionado requisito, derivaba en la exigencia de ilegitimidades groseras, su interpretación ha ido evolucionando, sumado a la posibilidad hoy indiscutible de aplicar directamente la Constitución.-

94. Al respecto expresa la doctrina nacional más prestigiosa: *"...El tribunal entenderá que hay ilegitimidad manifiesta cuando entienda que el proceso puede resolverse con razonable grado de seguridad por el procedimiento sumario del amparo. Nada de exigir ilegitimidades escandalosas, obvias,*

evidentes, palmarias. Lo único que precisa el juez es que la ilegitimidad sea lo suficientemente clara como para resolver por este proceso con el grado de seguridad habitual...” (Martín RissoAbadie, “La Acción de Amparo” en Procesos Constitucionales, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, FCU, junio de 2018).-

95. En el presente caso, la ilegitimidad debe analizarse teniendo en cuenta el apartamiento de la norma Constitucional. En el caso del Ministerio de Educación y Cultura, el impedirnos reconocer nuestro vínculo filiatorio, **importa un menoscabo al principio de igualdad, a nuestro derecho a no ser discriminados, a ser reconocidos como una familia y en virtud de ellos ser protegidos por el Estado.-**

96. Tal como expresó en Sentencia N° 183 del 03/10/2018 el Sr. Juez Letrado de Familia de 18° Turno, el Dr. Gerardo Alvarez, “... enfocando la cuestión en su justo término a juicio de este proveyente, la manifiesta ilegitimidad se ubica en restringir a ciertos colectivos por su condición y/o opción sexual de la posibilidad de poder proceder a la inscripción con los apellidos correspondientes a ambos integrantes de la pareja por no estar legalmente casadas. Dicho extremo no rige para el resto de los colectivos que componen la sociedad, y allí radica la discriminación. (...) La ilegitimidad manifiesta se entiende configurada partiendo de la base que la inscripción en el caso de autos no fue permitida por tratarse de una pareja homosexual no unida en matrimonio. La referida inscripción no es un mero formalismo sino la consagración a través de las formas (inscripción) de la carga afectiva y emocional que la pareja tiene respecto de sus hijos, en iguales condiciones como lo tiene una pareja heterosexual. Resulta ser absolutamente discriminatorio, y contrario a la normativa internacional ratificada por el Estado Uruguayo exigir vínculo matrimonial a las parejas homosexuales para la inscripción en cuestión y no hacerlo para las parejas heterosexuales.” (Subrayado nos pertenece).-

97. En suma, la ilegitimidad manifiesta radica en el Estado está violando sus propias disposiciones constitucionales, además de los diversos instrumentos internacionales de los que forma parte, los cuales disponen que el Estado

debe tratarnos como iguales y sin discriminación, proteger la familia como base de la sociedad y asegurar la especial protección de los niños; tal como se ha argumentado detalladamente en todo el cuerpo de este escrito.-

C) Inexistencia o ineficacia de otros medios para la protección del derecho

98. Si bien las acciones fundadas en el artículo 195 del CNA no exigen acreditar la imposibilidad de obtener la tutela por otros medios, para el caso en que se entienda que la presente acción tramita exclusivamente por la Ley 16.011 esgrimimos las siguientes consideraciones.-

99. **En nuestro caso concreto la Acción de Amparo se presenta como el único medio idóneo para evitar la lesión del derecho a la salud y a la vida.-**

100. Dado que nuestra situación no es contemplada expresamente por nuestras normas nacionales y que tampoco se establece otro procedimiento posible para hacer valer nuestra pretensión, además de que nos enfrentamos a la violación de diversos derechos constitucionalmente protegidos y estos en relación a dos niños, incluso de haber otros procedimientos ordinarios, ya sea jurisdiccionales como en vía administrativa, estos no resultarían idóneos para obtener el resultado, de acuerdo a lo previsto en el art. 2 de la Ley 16.011.-

D) Caducidad

101. Participamos de la posición que entiende que, tratándose el acto lesivo de una omisión continuada, como en la especie, no puede entenderse que el plazo de caducidad de treinta días previsto en la Ley 16.011 haya comenzado a correr.-

102. Sin perjuicio de lo antedicho, el M.E.C. aún no ha dictado resolución respecto de nuestra petición, pero dados los argumentos esgrimidos previamente respecto a la necesidad de ser protegidas en nuestros derechos constitucionales con la mayor celeridad posible debido justamente al carácter de estos, es que iniciamos la presente acción. Por lo expuesto, nos encontramos en plazo para presentar esta acción.-

VI. CONCLUSIONES

103. En suma: El Estado, en este caso a través del Ministerio de Educación y Cultura, tiene el deber de brindar un trato igualitario y sin discriminación a todas las personas, independientemente de cualquier condición de estas. En esa línea, tiene el deber de legislar y adaptar sus prácticas y costumbres, incluyendo las administrativas. También tiene el deber de reconocer y proteger toda modalidad de familia, y de brindar una especial protección a los niños.-
104. Esta entidad es, por tanto, la legitimada para la presente acción, iniciada por una familia que es discriminada en la legislación y en las prácticas administrativas, tanto en conjunto como individualmente, y **que ven sus derechos a la protección de la familia, a la protección de los niños y a la no discriminación, lesionados por el mismo Estado que debería velar por ellos.-**
105. El propio Director del MEC ha declarado que la voluntad institucional es la de no hacer ningún tipo de discriminación y llevar a cabo las inscripciones, pero que la normativa actual no se los permite y por ende no lo harán. Es decir que nuestra única alternativa es recurrir a la vía judicial a buscar protección.-
106. Nos parece importante recordar aquí que el artículo 6 del CNA así como el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen el principio del interés superior del niño, el cual deberá tenerse en primordial consideración al tomar medidas en lo concernientes a los niños. Estamos convencidas que nuestro reclamo es en favor del interés de nuestros hijos, y al respecto citaremos un inciso del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño que expresa: “(...) el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,...”. Es eso justamente lo que exigimos para nuestros hijos.-
107. También cabe destacar la exigibilidad de los instrumentos internacionales, principalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), las cuales fueron mencionadas

como normas de las que se están violando diversos derechos. Esta exigibilidad nace de su ratificación en las leyes 16.137 y 15.164 respectivamente, además de por lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados así como por el principio de no regresión consagrado por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado Uruguayo tiene la obligación de cumplir con las normas internacionales, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.-

108. Resulta pertinente también hacer hincapié en el artículo 332 de la Constitución, recordando la garantía que esta nos brinda ante las fallas en nuestra legislación, y recordando también el deber de los jueces de aplicar las normas, es decir, de hacer valer todos nuestros derechos hoy lesionados, supliendo la falta de regulación.-

109. Nuestro reclamo no es más que una exigencia de respeto de las normas nacionales e internacionales. **Lo que pretendemos no es ni más ni menos que hacer valer derechos por los que tanto se ha luchado y sufrido. Aún siendo el año 2018 y con tanto progreso en materia de derechos humanos y tolerancia hacia la comunidad LGBT, el Estado sigue en falta en cuanto aún no se ha logrado una igualdad sustantiva,** circunstancia que incluso le ha sido observada por órganos internacionales como el Comité de la CEDAW.-

110. Esta acción es nuestra única alternativa para hacer valer nuestros derechos, y quizás inspirar un cambio en las leyes y prácticas estatales, para que no solo nuestra familia, sino ninguna otra se vea en esta lamentable situación de desamparo y discriminación.-

VII. PRUEBA

Se solicita la agregación y diligenciamiento de los siguientes medios probatorios:

A) Prueba Documental

Letra A. “Consentimiento informado para inseminación artificial con semen de donante”.

Letra B. Testimonios de partidas de nacimiento de Mateo BURACIOC DE PEREDA y Julieta BURACIOC DE PEREDA.

Letra C. Petición ante la Dirección General del Registro de Estado Civil.

Letra D. Copia simple de fs. 32 del expediente caratulado “PINTOS VIERA, KARINA Y OTRO C/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA –AMPARO-, Ficha N° 2-41830/2018.

B) Prueba Testimonial

Se reciba la declaración de:

-La **Dra. Beatriz Vidarte**, con domicilio en Avenida Italia 2603 (Clínica de Alto Riesgo), en virtud de ser parte del equipo médico tratante durante el tratamiento de fertilización asistida, teniendo en cuenta que únicamente podrá presentarse ante la Sede los días lunes entre las 13 y 16 horas por motivos laborales impostergables.

Los testigos serán interrogados sobre:

1. Nuestra voluntad mutua de ser madres;
2. Si la actitud de Damaris fue acorde a esa voluntad.

Todo ello sin perjuicio, de lo demás que la Sede considere conducente.

LOS TESTIGOS DEBERÁN SER CITADOS POR LA SEDE.

VIII. DERECHO

Fundamos nuestro derecho en los artículos 7, 8, 40, 41, 42, 72 y 332 de la Constitución Nacional, artículos 1, 11.2, 17.1 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1, 2.1, 16.3, 25.2 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 5 y 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 15 del “Protocolo de San Salvador”, artículo 27 de la “Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados”, Ley 16.011, Ley 19.075, Ley 19.167 artículos 6, 23, 24, 26, 27, 27, 45 y siguientes y 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 240 del Código Civil y art. 11 del C.G.P y demás normas citadas en el cuerpo de este escrito, así como en toda otra que ampare mi pretensión.

IX. PETITORIO

Por lo expuesto, al Sr. Juez **PEDIMOS**:

1. Me tenga por presentado, con los recaudos adjuntos, por denunciado el domicilio real, por constituido el domicilio procesal y el electrónico y por deducida la presente acción.
2. Se notifique personalmente al Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C) sito en Reconquista 535, piso 9.
3. Se acceda y ordene el diligenciamiento de la prueba solicitada y ofrecida, convocando a la audiencia de precepto.-
4. En definitiva, se acoja la presente demanda, ordenando al Estado – Poder Ejecutivo en la persona del Ministerio de Educación y Cultura, a **efectuar el reconocimiento de Mateo Buracioc de Pereda y Julieta Buracioc de Pereda como hijos también de Damaris Marisol González Mujtarian y a hacerlo constar así en sus correspondientes partidas de nacimiento**, en el plazo de 24 horas de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 de la ley 16.011; y que en caso de no cumplirse con esta disposición se apliquen las sanciones pecuniarias que corresponde de acuerdo a la Ley 14.978.-

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: A los efectos de los artículos 85, 90, 105 a 107 del Código General del Proceso autorizamos a los Doctores Juan Ceretta, Analía Linares, Facundo Briz y a las Procuradoras María Belén Silva, Laura Pérez, María Graciana Abelenda y Fiorella De Horta, indistintamente.-

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Declaramos que nuestros domicilios reales son los que lucen en la comparecencia, y que, habiendo sido informadas sobre el alcance del mismo, investimos al letrado firmante como nuestro representante legal con las atribuciones que le otorga el artículo 44 del Código General del Proceso.-

TERCER OTROSÍ DECIMOS: Nos encontramos patrocinadas por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y por lo tanto exoneradas de la tributación correspondiente, así como respecto a los profesionales actuantes.-